

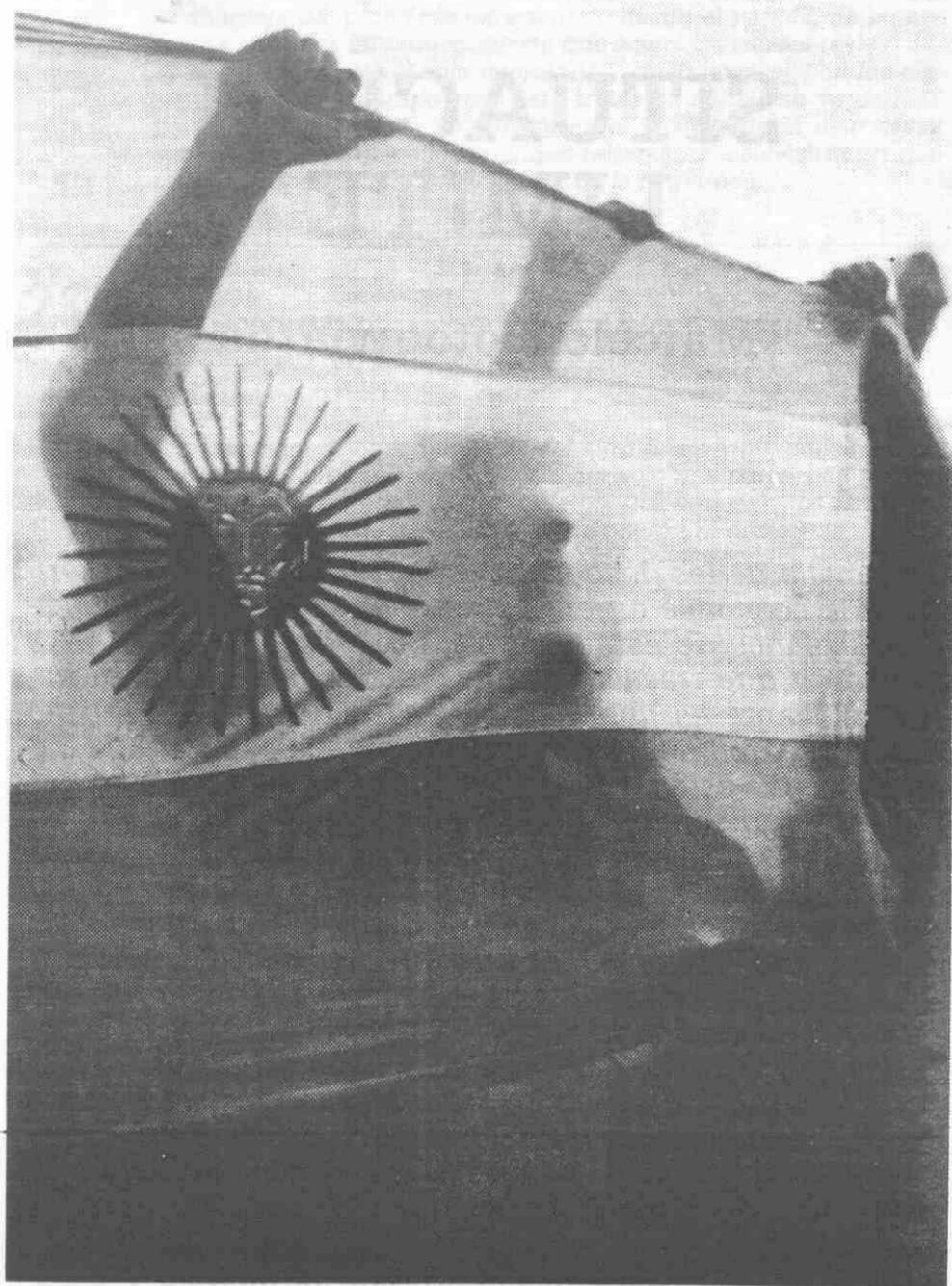
Coyuntura

SITUACION LIMITE

Marcelo Zlotogwiazda

Más allá de los desbordes coyunturales que caracterizan a la economía argentina en el último año y de los variados planes de estabilización que se aplicaron en ese período y que fracasaron con creciente rapidez, un hecho relevante es que las vicisitudes del corto plazo no desembocaron nunca en un cambio de la estrategia a largo plazo que está en vigencia. Si bien es cierto que las reformas estructurales que ha puesto en marcha el gobierno de Carlos Menem son mucho más ambiciosas que las planteadas por la administración radical, la orientación de ambas marca una continuidad cuya única diferencia es el cambio que ha habido en los ritmos de realización.

La razón de fondo de la ininterrumpida crisis coyuntural y de la aparición recurrente de períodos hiperinflacionarios, es que el nuevo modelo ya tiene un diseño definitivo y salen a la luz en toda su dimensión los efectos que tendría su funcionamiento sobre el conjunto de la sociedad. Las turbulencias del último año son la expresión de las dudas respecto a su viabilidad sociopolítica y a la capacidad de la clase política para imponer el conjunto de precios relativos consistente con el modelo y para regular el conflicto social que de él se deriva.



Por tercera vez en los últimos nueve meses, la economía ha ingresado en un periodo hiperinflacionario, a tal punto que al cierre de esta nota las proyecciones sobre el índice de precios al consumidor calculan un aumento para febrero superior al 60 por ciento. La producción se limita a lo mínimo indispensable y casi todas las transacciones con insumos y bienes finales en las etapas de producción y distribución se realizan con precios vinculados a la cotización del dólar. Los precios de los bienes finales de consumo no durable se reajustan con inusitada frecuencia y en función exclusiva de lo que ocurre con la divisa norteamericana. En cuanto al comercio de bienes durables y la prestación de servicios privados, la mayor parte de las transacciones directamente se pacta en dólares, y muchos de los que no proceden así prefieren postergar ventas y mantener las existencias, para evitar que el tiempo que transcurre entre la operación de venta en australes y la transformación a dólares de sus ingresos signifique la desvalorización del capital de trabajo.

Este comportamiento de empresarios y comerciantes en el proceso productivo no es sino el reflejo de una actitud generalizada en toda la actividad económica: el síntoma globalizador de la actual coyuntura es la vertiginosa huida del austral y la acelerada dolarización de todos los activos líquidos. La demanda de dinero —entendida como el deseo de mantener australes en el bolsillo— ha caído a niveles límites, a punto tal que cualquier excedente transitorio se convierte de inmediato en dólares.

Desde el punto de vista de la es-

tricta lógica económica, la explicación de lo que sucede se reduce al profundo deterioro de las funciones del dinero. El austral ha perdido la virtud de servir como reserva de valor y apenas conserva cierta capacidad como unidad de cuenta de las mercancías y como medio de pago de las transacciones. El dólar lo ha desplazado casi por completo como instrumento para el ahorro y en forma creciente está pasando a cumplir las funciones de unidad de cuenta para los precios y de medio de pago para las operaciones.

Esta perversa dinámica monetaria, que a medida que se impone retroalimenta en forma potencial la huida del austral, tiene drásticas consecuencias sobre el comportamiento real de la economía. La depresión de la demanda agregada que surge del brutal deterioro en el poder de compra de los salarios, se conjuga con la retracción autónoma de la producción que se deriva de un marco de total incertidumbre, para generar una profunda recesión fabril que poco a poco se está traduciendo en suspensiones y despidos.

El panorama recesivo se complica todavía más por el papel que el gobierno impone a la actividad productiva del estado. Atrapado en el compromiso ideológico con el poder económico que conforma la alianza oficial, el gobierno ha reducido enormemente los niveles de inversión y gasto público con el objetivo de equilibrar el presupuesto. Pero ese compromiso que inhibe al estado para liderar cualquier recuperación en la actividad productiva induciendo un aumento en la demanda agregada, ni siquiera sirve para extirpar el déficit: la hiperinflación desva-

loriza rápidamente el nivel de las tarifas de las empresas públicas y disminuye el nivel real de los ingresos tributarios —efecto Olivera-Tanzi¹—, con lo que se anula gran parte del esfuerzo de contención del gasto.

Pero a diferencia de las dos hiperinflaciones anteriores (mediados del año pasado y últimas dos semanas de 1989), el presente fenómeno de dolarización parece presentar rasgos únicos que tornan muy difícil la salida. El rechazo al austral ha sido asumido como un comportamiento básico, independientemente de cualquier promesa o anuncio. En semejante contexto, la hiperinflación se inmuniza contra cualquier intento de estabilización, y la coyuntura queda encerrada en una dinámica perversa en la cual el dólar no cesa de subir porque el mercado de cambios sólo tiene demandantes, los precios tratan de acompañar el alza de la divisa y los salarios nominales reciben aumentos que no alcanzan a mantener su poder de compra.

Otro fenómeno peculiar del período hiperinflacionario de fines de 1989 y del que se desató un mes después, es que la caída en la demanda de dinero y el alza incontenible del dólar se traducen casi instantáneamente al sistema de precios,

cosa que no ocurrió a mediados del año pasado cuando los precios quedaron muy rezagados respecto al tipo de cambio. Esta dolarización instantánea se debe en buena medida a la ausencia de controles de precios que, aun con gran imperfección, amortiguaban el impacto del alza en el tipo de cambio.²

Además de la **inmunización** frente a medidas económicas y de la **autonomización** de su dinámica, el actual proceso hiperinflacionario se desarrolla a un ritmo mucho más veloz que los dos anteriores, lo que demuestra que se está próximo a un punto de inflexión. Por todo lo dicho hasta aquí, resulta claro que las definiciones o los hechos que provocarán ese punto límite no serán de carácter económico sino político.

La aceleración de los tiempos

Las medidas que anunció el ministro Antonio Erman González a comienzos de 1990 constituyen, junto al Primavera y al BB, el tercer plan de estabilización lanzado en el último año y medio que tuvo características **ofensivas**, a diferencia de los muchos otros paquetes de medidas³ anunciados desde el 6 de febrero del año pasado que fueron intentos **defensivos**, desesperados e improvisados para frenar un desborde hiperinflacionario que ya era irremediable.

De la comparación de los tres planes ofensivos mencionados, surge que el grado de efectividad y su vida útil se fue reduciendo y, como contracara de ello, los brotes hiperinflacionarios que sucedieron al fracaso de cada uno tuvieron un período de maduración cada vez más corto. La

1. Se conoce por efecto Olivera-Tanzi a la disminución en términos reales de la recaudación tributaria como consecuencia del impacto que tiene la inflación durante el período que transcurre entre la liquidación de impuestos y su pago.

2. Ver Jorge Todesca, *Ambito Financiero* del 21-2-89, página 4.

3. Al margen de los tres planes de estabilización mencionados, se contabilizan las reformas cambiarías del 7-2-89, 21-2-89 y 1-3-89 (Sourrouille), del 5-4-89, 18-4-89 y 5-5-89 (Pugliese), del 30-5-89 (Rodríguez), y del 10-12-89 (Rapanelli).

duración de las distintas fases (calma, ruptura y maduración del desborde, hiperinflación) de esos tres planes así lo demuestra.

El plan Primavera anunciado el 3 de agosto de 1988 gozó de un período de tranquilidad de seis meses, otros tres meses transcurrieron desde su ruptura y el inicio de la hiperinflación propiamente dicha y la situación límite se prolongó desde mayo hasta julio, con índices de costo de vida que aumentaron 78,5, 114,5 y 196,6 % respectivamente.

El plan BB de Miguel Roig y Néstor Rapanelli alcanzó a aquietar las variables de coyuntura durante cuatro meses (agosto a noviembre), y su desintegración dio paso a una nueva situación hiperinflacionaria en cuestión de días, con un salto en el índice de precios del 6,5 en noviembre al 40,1 en diciembre y al 79, en enero (contribuyó más a esta última cifra el arrastre estadístico de diciembre que las remarcaciones de enero).

La evolución fue aún mucho más acelerada con las medidas del plan Bonex anunciado el 1º de enero de este año para complementar a la liberación del tipo de cambio y de los precios que el ministro González puso en práctica al asumir el pasado 18 de diciembre. Este conjunto de instrumentos alcanzó a mantener relativamente estables a los precios y al dólar durante menos de un mes. A partir de fines de enero se ingresó nuevamente en un proceso hiperinflacionario y de escalada del dólar que, al cierre de este artículo, permiten pronosticar un alza de no menos del 60 % para el costo de vida de febrero y un dólar que seguramente será bastante superior a los 5.000 australes a fin de este mes.

Estabilización y largo plazo

Más allá de los desbordes coyunturales que caracterizan a la economía argentina en el último año y de los variados planes de estabilización que se aplicaron en ese período y que fracasaron con creciente rapidez, un hecho relevante es que las vicisitudes del corto plazo no desembocaron nunca en un cambio de la estrategia a largo plazo que está en vigencia. Si bien es cierto que las reformas estructurales que ha puesto en marcha el gobierno de Carlos Menem son mucho más ambiciosas que las planteadas por la administración radical, la orientación de ambas marca una continuidad cuya única diferencia es el cambio que ha habido en los ritmos de realización.

Que la estrategia de reformas estructurales se haya mantenido como una constante a lo largo del último año, constituye un dato central para analizar y entender el fracaso —cada vez más rápido— de los sucesivos planes de estabilización. Esto es así ya que, por definición, un plan de estabilización es un conjunto de medidas destinadas a fijar precios relativos que se mantengan en el tiempo y si no lo logra puede ser debido a su inconsistencia técnica o a la imposibilidad de que la sociedad acepte sus resultados. En las circunstancias actuales, y recordando la inmunidad contra cualquier grupo de medidas que ha logrado el proceso hiperinflacionario, queda claro que la causa de la ineffectividad de los planes de estabilización está vinculada a lo político, en la medida en que el gobierno no consigue imponer las consecuencias del ajuste o —lo que tiene idénticos resulta-

dos— no alcanza a convencer de que es capaz de asegurar en el tiempo el conjunto de precios relativos que viabilizan las reformas estructurales.

Es por eso que el debate actual sobre la coyuntura se concentra en la definición de un marco político (pacto social, primer ministro, ministro coordinador, etc.) que neutralice y absorba la resistencia que distintos sectores oponen al ajuste, y que dirima el conflicto social a favor de un conjunto de precios relativos consistente con las reformas estructurales.

Lo que por el momento está en discusión es eso y no la orientación económica a largo plazo. El ejemplo más claro son las innumerables declaraciones de voceros del "establishment" económico que no se cansan de brindar su total adhesión y apoyo a la filosofía básica de las reformas estructurales en marcha, pero que siempre señalan sus temores de que el gobierno modifique el rumbo estratégico por no poder enfrentar las demandas y protestas sociales que esas reformas generan. En definitiva, la huida del austral y la consecuente dolarización de facto, expresan una crisis de confianza que se origina en las dudas sobre la capacidad del gobierno de regular el conflicto social para que el esquema a largo plazo termine siendo permanente.

Una revisión a los últimos planes: el BB

En forma simultánea al anuncio de que se iban a profundizar los cambios estructurales que tibiamente había intentado la administración

de Alfonsín, Carlos Menem —junto a Miguel Roig, primero, y a Néstor Rapanelli, después— lanzó un plan de estabilización que apeló a los mismos instrumentos básicos de control que habían estado presentes en cada uno de los planes anteriores, y que pretendían tener cierta coherencia con los objetivos del modelo de acumulación que se venía perfilando y que se quería terminar de imponer.

El tipo de cambio fue valorizado sustancialmente para favorecer las exportaciones, las tarifas públicas se reajustaron fuertemente para contribuir al cierre fiscal y los precios se acomodaron muy por encima del nivel de los salarios pero por debajo del dólar vigente para las operaciones de comercio exterior. En parte debido al desajuste inmediato que sufrió ese conjunto de precios relativos como consecuencia de que el congelamiento de julio dejó a los precios muy por encima de los niveles previstos, a la larga Rapanelli no pudo sostener en forma simultánea el objetivo de estabilidad y precios relativos acordes con las necesidades estratégicas del modelo. El tipo de cambio se fue retrasando —y con ello conspirando en contra de la orientación exportadora buscada para la actividad productiva—, y lo mismo ocurrió con las tarifas, complicando el logro de una situación fiscal compatible con la estabilidad. A su vez, el desequilibrio presupuestario que permanecía y la política monetaria que apuntaba a descomprimir la demanda de divisas mediante el impulso alcista de las tasas de interés, elevaron el endeudamiento interno del estado y el déficit cuasi-fiscal que se generaba en el Banco Central con el pago de ese financia-

miento (a través de las tasas de interés sobre encajes e indisponibles del sistema bancario o de la amortización de los bonos y títulos emitidos por el Banco Central). A comienzos de diciembre el plan de estabilización había estallado en pedazos (la cotización del dólar en el mercado marginal superaba en un 50 % a los 650 australes del mercado oficial), y los reajustes del 10 de diciembre (devaluación del 54 % en el mercado oficial y reprogramación de la deuda interna) fueron un matotazo de ahogado totalmente inefectivo: a los pocos días el dólar cotizaba a 1.550 australes en el mercado libre, lo que representaba una brecha de más del 50 % respecto a la cotización de 1.000 australes del dólar comercial.

El plan Bonex

Sin modificar un ápice la estrategia global para el largo plazo, el ministro Antonio Erman González decidió dejar de lado los instrumentos estabilizadores que habían utilizado sus antecesores, y optó por eliminar el control de precios y liberar el tipo de cambio. Debajo de esa medida estaba la ingenua idea de que la eliminación de los controles sobre las variables clave de la coyuntura —un esquema que en toda su extensión sólo registra antecedentes con el ministerio de Roberto Alemann en 1982— iba a aumentar el convencimiento de los grandes empresarios acerca de la orientación privatista y libremercadista del gobierno y que eso serviría para estabilizar los mercados.

La pasividad del gobierno que acompañaba ese esquema duró

menos de una semana desde la asunción de González el 18 de diciembre pasado. Hacia fin de año, el dólar llegaba a los 2.000 australes y los precios comenzaban a sufrir fuertes remarcaciones. No se tardó en comprender que se estaba próximo a un nuevo plan de estabilización **ofensivo**, lo que aceleró aún más el aumento de precios. La distancia que mediaba hasta una situación propiamente hiperinflacionaria fue cubierta con múltiples y coincidentes versiones originadas en el propio Ministerio de Economía, que hablaban de la puesta en práctica de la convertibilidad del austral, con un plan basado sobre trabajos que venía preparando el entonces secretario de Gestión Económica, Eduardo Curia. La idea era fijar un tipo de cambio único entre 4.000 y 6.000 australes, y asegurar públicamente que todos los australes circulantes podían ser convertidos a dólares a ese tipo de cambio. La lógica implícita era que el estado contaba con un nivel de reservas suficientes como para financiar la conversión de toda la base monetaria (pasivos del Banco Central en forma de circulación monetaria y de depósitos de los bancos en el Banco Central).

Aunque en los últimos días del año los precios se acomodaron en función de los niveles de tipo de cambio que se barajaban, el plan de convertibilidad fue imprevistamente abandonado antes de ser anunciado. Si bien las declaraciones que hicieron los funcionarios del gobierno para justificar dicho abandono argumentaban cuestiones tales como la "pérdida de la soberanía monetaria", las razones de fondo del arrepentimiento fueron:

a) el estado no disponía de un

monto de reservas suficiente como para respaldar el programa;⁴

b) un esquema de libre convertibilidad sólo tolera la expansión monetaria originada en el sector externo, ya que ésta tiene su correspondiente contrapartida en divisas, y el gobierno sabía que le resultaba imposible asegurar el equilibrio presupuestario y la no emisión de dinero.

El 1º de enero el ministro anunció el plan Bonex con el objetivo de "limitar la circulación de australes a lo estrictamente necesario para que puedan pagarse los sueldos y jubilaciones, para que puedan hacerse las transacciones comerciales que requiere la vida cotidiana, y para que las entidades financieras puedan atender puntualmente los retiros de depósitos de las familias y los pequeños y medianos ahorristas". En síntesis, el plan se basó sobre la prohibición de nuevos depósitos a plazo fijo, y en la entrega de Bonex 89 a cambio de todo el endeudamiento estatal en títulos públicos y de la porción que excediera al millón de australes de todos los depósitos a plazo fijo y en caja de ahorro especial que había en el sistema bancario.

Las medidas implicaban el canje de alrededor de 2.000 millones de dólares en títulos públicos que constituían una porción significativa de la deuda interna, por la nueva serie de Bonex 89 de vencimiento a largo plazo y amortización en dólares, lo que de hecho significó el re-

emplazo de deuda interna a corto plazo por deuda externa a largo plazo. En cuanto a los depósitos a plazo fijo que sumaban un total de 4,6 billones de australes (2.300 millones de dólares a un tipo de cambio de 2.000), el canje de los montos superiores al millón hubiese representado —según el planteo original— la entrega de Bonex 89 por el equivalente a 3,5 billones de australes (1.750 millones de dólares).

Vale aclarar que el planteo original de esta última medida sufrió de entrada una modificación de importancia, que días después iba a tener consecuencias en los mercados: conscientes de que como respuesta a los anuncios, el sector privado podría llegar a retacear el pago de obligaciones tributarias, el gobierno autorizó el pago de impuestos durante un corto tiempo mediante el dinero de los depósitos que había quedado retenido en el sistema financiero a la espera de ser canjeados por Bonex 89. De acuerdo con los cálculos del Banco Central, esta excepción que favoreció a las grandes empresas —en tanto y en cuanto son ellas las principales contribuyentes de la DGI— se tradujo en un menor canje de depósitos por entre 600.000 y 900.000 millones de australes (las estimaciones oscilan en ese orden) y, por lo tanto, se vio atenuada la restricción monetaria que buscaba el gobierno.

Con el plan Bonex el equipo económico apuntaba a tres objetivos básicos:

1. eliminar el déficit cuasifiscal del Banco Central que resultaba de un desequilibrio negativo entre la remuneración por los encajes e indisponibles del sistema financiero y los ingresos que generaban los redes-

4. En su discurso del 1-1-90, Antonio Erman González admitió que las reservas en dólares ascendían a 880 millones, a los que —además—, había que descontarle el pago de la renta de los Bonex que vencían a mediados de febrero por 370 millones de dólares.

cuentos otorgados con ese dinero;

2. reducir la volatilidad que tenía un sistema financiero conformado por una cartera de depósitos que estaban colocados a siete días;

3. restringir la liquidez de la economía y con ello limitar los fondos que potencialmente podían presionar sobre el dólar.

El primero de los tres objetivos fue logrado y eso hizo creer a algunos que estaba asegurado el compromiso de no emitir (tal como alegremente señaló el entonces presidente del Banco Central, Rodolfo Rossi): la contención del gasto público iba a permitir el cierre del déficit fiscal, y las nuevas medidas la desaparición del déficit cuasifiscal. Pero los otros dos objetivos quedaron en una expresión de deseos.

El canje compulsivo de títulos y depósitos —que afectó principalmente a los medianos/grandes ahorristas y a los bancos— deterioró la confianza en el sistema financiero e hizo que los excedentes transitorios de liquidez se mantuvieran en dólares o en depósitos en cuenta corriente o en caja de ahorro, que pueden ser extraídos tan pronto como se quiera.

En cuanto a la iliquidez que se buscaba, la excepción para el pago de impuestos con el dinero retenido significó que quedara en el sistema un monto de dinero muy superior al previsto. De todas formas, los datos elaborados por el Banco Central revelan que —a pesar de esa excepción— los agregados monetarios sufrieron el efecto. Respecto a la base monetaria (total de pasivos del Banco Central compuesto por la circulación de billetes y monedas y por los depósitos de los bancos en el Banco Central) y comparando, como

ejemplo, las cifras del 30 de enero con las del 16 de febrero, se advierte que pasó de 4,9 a 5,2 billones de australes, lo que representa un incremento de apenas el 6 % mientras que la inflación de esos 17 días no es inferior al 30 por ciento. Algo similar ocurrió con la circulación monetaria, que en ese período creció un 8,5 %, pasando de 3,3 a 3,58 billones de australes.

En cuanto al total de depósitos (antes del lanzamiento del plan Bonex había 4,6 billones nada más que en plazos fijos), alcanzaban el 12 de febrero 3,2 billones de australes, cifra apenas superior a la de principios de año.

Otra manera de medir el grado de monetización de la economía es a través de los indicadores que se conocen como M1 y M4. Según la estimación del estudio Siare, el M1 (suma de la circulación monetaria y de los depósitos en cuenta corriente) de febrero equivaldrá al 2,77 % del producto bruto interno, cuando en diciembre pasado —un período histórico de ya baja monetización— equivalía al 4,12. Por su parte el M4 (M1 más el resto de los depósitos) de febrero equivaldría al 4,57 % del PBI mientras que en diciembre fue del 11,2 por ciento.

Sin embargo, la lógica monetarista que se inspira en la teoría cuantitativa del dinero⁵ y que guió a los im-

5. La teoría cuantitativa del dinero se presenta mediante la ecuación $M \cdot V = P \cdot T$, donde (M) es cantidad de dinero, (V) la velocidad de circulación del dinero, (P) el nivel de precios y (T) la cantidad de transacciones. Su corolario es que si se mantiene fijos (V) y (T), el nivel de precios queda determinado por la cantidad de dinero, es decir que la inflación es función de la emisión.

pulsores del plan (Domingo Cavallo entre ellos), mostró su total invalidez. Pese a la restricción monetaria que se evidencia en las comparaciones anteriores, el aumento en el nivel de precios de los primeros dos meses del año no será inferior al 100 % (aun descontando el efecto arrastre sobre el índice de enero).

Quienes creen en la ecuación de la teoría cuantitativa insisten en utilizarla como explicación al nuevo brote hiperinflacionario. Sostiene que aun cuando la cantidad de dinero que hay en la economía se mantuvo relativamente estable, la brutal caída en la demanda de dinero por parte de la población o, lo que es lo mismo, el fortísimo aumento en la velocidad con que circula esa masa monetaria, multiplican la cantidad de dinero, y eso es lo que impulsa el alza en los precios.

Si bien es correcta esa apreciación sobre la caída en la demanda de dinero y sobre el aumento en la velocidad de circulación, la evidencia de la realidad muestra con absoluta nitidez que el alza en los precios no es consecuencia de una presión de demanda en el sector real de la economía —la caída en los niveles de consumo⁶ es un claro indicador

de que no existe tal exceso de demanda—, sino que las remarcaciones se realizan a imagen y semejanza de la valorización del tipo de cambio. Tal como se señaló antes, el actual proceso hiperinflacionario tiene como única y sencilla causa al fenómeno de dolarización, ocasionado por la fuga desde el austral que provoca un alza incesante del tipo de cambio que en forma casi instantánea se vuelca a los precios. Y en medio de esa actitud generalizada, ninguna restricción monetaria por más violenta que sea puede frenar la presión sobre el dólar ya que todo excedente temporario de australes se dolariza de inmediato.

Al deterioro o la desaparición de las tres funciones básicas del austral (unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor), se le agrega ahora la extinción misma de la moneda. Fruto de las medidas del 1º de enero pasado y de la menor emisión monetaria que hay desde entonces, la masa de australes que hay en la economía se ha licuado significativamente en términos de dólares. Tomando los agregados de mediados de febrero y un tipo de cambio de 4.000 australes, la circulación monetaria es de apenas 900 millones de dólares, el total de la base monetaria de 1.290 millones, y el conjunto de los depósitos de 807 millones.

Esta realidad ha hecho que muchos analistas económicos e incluso varios políticos insistan en proponer el esquema de convertibilidad como solución a la crisis. Pasan por alto que ningún instrumento técnico puede llegar a ser efectivo como salida al nuevo brote hiperinflacionario mientras el gobierno no acierte en definir el marco político que logre imponer en la sociedad las modifica-

6. De acuerdo con datos de la Unión Industrial Argentina referidos al mes de enero, la caída en las ventas alcanza los siguientes porcentajes: alimentación (60), carne (25), tabaco (11), textiles (50), fibras (70), indumentaria (50), calzado (60), marroquinería (60), madera (90), papel (31), gráficos (50-60), plásticos (30-35), caucho (60), neumáticos (40), farmacéutica (30), jabón (36), cemento (52), siderurgia (44), aluminio (86), metalúrgica (60), automotores (12), electrónica (90), minería (50). Si bien las cifras pueden resultar exageradas, la tendencia recesiva y la caída en la demanda está clara.

ciones estructurales en marcha y, en función de eso, un conjunto de precios relativos consistente y aceptado.

Situación límite

Al cierre de esta nota el avance de la dolarización parecía no tener límites y la hiperinflación estaba instalada de pleno. Con una aproximación exclusivamente económica, resulta evidente que el gobierno carece de margen para intentar un nuevo plan de estabilización y no dispone de instrumentos como para corregir la marcha del plan de estabilización vigente.

Aun cuando son cada vez más los que se inclinan por un retorno a un esquema de controles que al menos ancle alguna de las variables fundamentales de la coyuntura (control de precios y/o de cambios), la inviabilidad de esa alternativa está dada por el condicionamiento que se deriva de la alianza establecida con el poder económico, que reaccionaría negativamente si perdiera la conquista ideológica de la libertad de los mercados. Al mismo tiempo, la **inmunización** de la dinámica hiperinflacionaria contra cualquier tipo de paliativo, y la imposibilidad del equipo económico para hacer uso de la política monetaria como freno al avance del dólar (como ya se explicó la demanda en dólares es ahora independiente de la tasa de interés y de la cantidad de dinero circulante), permite descartar el éxito de eventuales medidas correctivas.

Atrapado en semejante laberinto, el equipo económico sólo atina a enviar señales que confirman la libertad de los mercados y la vigencia

de la estrategia de reformas estructurales, tal como se desprende de los anuncios que realizó el ministro González el domingo 18 de febrero. Con esas medidas marginales (básicamente se trata de profundizar la apertura importadora a través de una rebaja adicional de aranceles —su efectividad es dudosa debido a la protección que implica un tipo de cambio elevado como el actual—, restringir aún más la inversión pública —caso de YPF— y las transferencias a las provincias), el gobierno intenta convencer al poder económico de su firme voluntad para seguir adelante.

Como se señaló antes, la confianza en los lineamientos básicos de la estrategia en marcha requiere a esta altura de definiciones mucho más contundentes y que trasciendan el plano económico. La aceleración de los tiempos y la cercanía de una situación límite en el funcionamiento económico y social, preanuncian que el punto de inflexión será provocado por acontecimientos del ámbito social y político.

Desde el lado oficial, los pasos dados hacia la concreción de un pacto social a través de la firma por parte del bloque empresario y de las dos centrales sindicales del documento "Bases para un nuevo consenso político, económico y social", y las negociaciones con el radicalismo tendientes a conformar una especie de gobierno de coalición, son hechos que ocurrían al cierre de esta nota validando lo dicho.

Pero el origen de los potenciales desencadenantes de ese punto de inflexión no se agotan en lo "político". El creciente reclamo sindical en protesta por el deterioro salarial y en rechazo a los programas de privati-

zación y de reducción del plantel de empleados públicos, junto a los primeros indicios de una nueva ola de saqueos, son dos importantes ejemplos de las presiones que se acumulan desde "lo social".

En definitiva, lo que se aproxima es el momento de poner en claro si las reformas estructurales en marcha desde hace ya tiempo se desarrollarán o no dentro de un espacio político social claramente favorable. En concreto, eso significa que lo que estará en juego en las próximas semanas es un retroceso difícil de remontar para los sectores sociales que ya están siendo perjudicados por la estrategia en marcha. Si la dictadura militar significó una vuelta de página para el modelo económico anterior y el germen de la orientación del nuevo modelo, la derivación de la tremenda crisis del último año dejará en claro si —de una vez por todas— se generan las condiciones óptimas para el desenvolvimiento de ese modelo sin ningún tipo de titubeos por parte de una clase política que hasta el momento no se ha mostrado dispuesta a asegurar esas condiciones y asumir los costos respectivos.

Si bien en una situación límite como la que se avecina los sectores en conflicto maximizan su capacidad de lucha, la debilidad que traen de arrastre el movimiento obrero y los sectores progresistas, disminuye su capacidad para contrarrestar el peso específico que pueden ejercer los grupos económicos más concentrados y la banca acreedora para determinar la salida a la crisis. Es decir que aparece como muy probable que la vía de escape a la presente situación límite sea un intento de instaurar condiciones políticas y sociales

mucho más propicias al desarrollo de la estrategia de cambios estructurales ya en vigencia.

El modelo en discusión

La estructura económica que se ha venido gestando desde fines de los años setenta, resulta de la conjunción de una nueva forma de acumulación de capital con un nuevo papel del estado.

El modo de acumulación que se viene perfilando en los últimos años tiene tres características que están presentes desde principios de los años ochenta, y una cuarta que aparece en los últimos años:

1. el aprovechamiento de la renta originada en la explotación de los recursos naturales de la tierra, del subsuelo y del mar, entre los que se destacan los cereales, el petróleo, el gas y la pesca;

2. el liderazgo de ramas industriales que a fuerza de subsidios y/o del endeudamiento externo, lograron una sustancial incorporación tecnológica que, juntamente con las ventajas comparativas derivadas de los insumos que utilizan o del bajo precio de la mano de obra, están en condiciones de competir internacionalmente y orientar su producción hacia el mercado externo (siderurgia, petroquímica, celulosa-papel, entre las más importantes);

3. el crecimiento en la producción de bienes finales y en el abastecimiento de servicios destinados a los segmentos de consumo ubicados en la parte superior de la pirámide social.

Estos tres rasgos que dominan la evolución que tuvo la estructura industrial a lo largo de los últimos diez

años, se desarrollaron hasta hace poco con un estado que seguía manteniendo buena parte de las funciones de la etapa anterior, asegurando la infraestructura necesaria y el suministro de los servicios básicos y apuntalando a los grandes grupos económicos que protagonizaban los tres rasgos señalados, mediante la transferencia de una enorme masa de subsidios que se canalizaban a través de un sinnúmero de mecanismos.

Aunque el gobierno radical ya había avanzado tibiamente en la transformación de un estado que —debido a la crisis fiscal originada en el tipo de funcionamiento anterior— no podía seguir cumpliendo el mismo papel, la novedad más trascendente que introdujo la administración de Carlos Menem fue el planteo absoluto de reforma estatal, que se resume en la sanción de las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado.

Con la primera se buscó reducir la transferencia de subsidios hacia los grupos económicos,⁷ pero para éstos el perjuicio aparente no será tal dado que las privatizaciones contempladas en la ley de Reforma del Estado los encontrará como principales beneficiarios junto a la banca acreedora.

De esta manera se contempla el perfil del nuevo modelo de acumulación, donde la apropiación y usufructo de los activos y negocios estatales hace las veces de cuarta pata de la mesa.

En teoría, el nuevo modelo tiene la ventaja de abrir un espacio para que coincidan los intereses de la gran burguesía industrial y agropecuaria con los de los bancos acreedores, en la medida en que ambos

se favorecen de la generación de un fuerte superávit comercial (los primeros por la orientación exportadora de su producción y los bancos por la posibilidad de cobrar intereses) y de la privatización de activos y negocios estatales que en buena parte se financiará con la capitalización de los títulos de la deuda externa.

La definición

La razón de fondo de la ininterrumpida crisis coyuntural y de la aparición recurrente de períodos hiperinflacionarios, es que el nuevo modelo ya tiene un diseño definitivo y salen a luz en toda su dimensión los efectos que tendría su funcionamiento sobre el conjunto de la sociedad. Las turbulencias del último año son la expresión de las dudas respecto a su viabilidad sociopolítica y a la capacidad de la clase política para imponer el conjunto de precios relativos consistente con el modelo y para regular el conflicto social que de él se deriva.

En cuanto a los precios relativos, el superávit comercial precisa como condición ineludible un tipo de cambio muy elevado y un nivel de salarios muy bajo,⁸ lo que para el capital

7. Su vigencia original fue de 180 días, pero el ministro de Economía acaba de anunciar que será prorrogada. Es decir que, entre otras consecuencias, seguirán recortados los beneficios de la promoción industrial. Distintas estimaciones calculan que la transferencia anual de subsidios oscila entre 2.500 y 4.000 millones de dólares.
8. Rosalía Cortés y Adriana Marshall sostuvieron en 1986 (ver *Desarrollo Económico* N° 101) que el superávit comercial no tiene alta correlación positiva con sala-

orientado a la exportación representa una tasa de ganancia altísima. A su vez, la explotación privada de los servicios públicos requiere de tarifas acordes con los costos de producción y de la eliminación del concepto de servicios subsidiados.

En relación con la situación social que acompañaría al modelo, el panorama sería de un ulterior agravamiento en los indicadores actuales sobre nivel salarial,⁹ desocupación y subempleo,¹⁰ marginalidad y pobreza¹¹ y distribución del ingreso.¹²

En definitiva, lo que está en juego en estos días es si el gobierno asegura la continuidad de la estrategia que ya está en marcha, sin ningún tipo de contemplaciones frente a sus consecuencias. Si opta por esta alternativa que le reclama la gran burguesía interna y los acreedores extranjeros, el modelo habrá dado un paso decisivo. Sin embargo, de eso a asegurar un tránsito estable hay una distancia enorme.

23 de febrero de 1990

rios bajos. Argumentaban que gran parte del consumo era realizado por los capitalistas y que, por lo tanto, una caída en el nivel de consumo de los asalariados no implicaba la aparición de excedentes exportables. La tesis es válida si se piensa en niveles de superávit comercial reducidos, pero no cuando se trata de generar varios miles de millones de dólares. Además, no hay que perder de vista la importancia de tener un costo laboral muy bajo para la competitividad internacional de la producción industrial.

10. Datos suministrados por el Ministerio de Trabajo señalan que sobre una población económicamente activa de 12,2 millones de personas, hay 910.000 desocupados y 3,6 millones subempleados.

11. De acuerdo al IPES un 35,4 % de la población está en grado de pobreza extrema. En esa situación están 4 millones de personas en Capital Federal y Gran Buenos Aires, 325.000 en Gran Córdoba, 370.000 en el Gran Rosario y 120.000 en el Gran Santa Fe.

12. Un estudio realizado por el IPES arrojó que el 40 % de la población de más bajos ingresos se apropia del 12,6 % del ingreso nacional, que al siguiente 50 % le corresponde el 51 %, y que el 10 % más rico se queda con el 36,4 % del ingreso nacional.

9. Los cálculos de FIEL referidos a enero de 1990 indican que el poder de compra de los salarios es de 65 con una base = 100 en diciembre de 1983 y de 98 en diciembre de 1988.